

Sentencia impugnada:	Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, del 16 de septiembre de 2014.
Materia:	Laboral.
Recurrente:	Claro-Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.
Abogados:	Dres. Tomás Hernández Metz y Manuel Madera Acosta.
Recurrido:	Rubén Amparo Reyes Mañón.
Abogados:	Licdos. Martín Ernesto Bretón Sánchez y Fidel Moisés Sánchez Garrido.

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, competente para conocer las materias de *tierras, laboral, contencioso-administrativo y contencioso-tributario*, regularmente constituida por los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz, presidente, Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico, miembros, asistidos de la secretaria de la Sala, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en fecha **30 de agosto de 2019**, año 176° de la Independencia y año 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:

Apoderada del recurso de casación interpuesto por Claro-Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., entidad comercial, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y establecimiento principal ubicado en la avenida Jhon F. Kennedy núm. 54, Santo Domingo, Distrito Nacional, la cual tiene como abogados constituidos a los Dres. Tomás Hernández Metz y Manuel Madera Acosta, dominicanos, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0198064-7 y 001-1355839-9, con estudio profesional abierto en común en la oficina de Abogados y Consultores Headrick, Rizik, Álvarez y Fernández, ubicado en las avenidas Gustavo Mejía Ricart y Abraham Lincoln, ensanche Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional; recurso que está dirigido contra la sentencia núm. 211/2014, de fecha 16 de septiembre de 2014, dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante.

*I. Trámites del recurso:*

1. Mediante memorial depositado en fecha 4 de diciembre de 2014, en la secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional Claro-Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., interpuso el presente recurso de casación.
2. Por acto núm. 894/2014, de fecha 5 de diciembre de 2014, instrumentado por Pedro de la Cruz, la parte recurrente Claro-Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., emplazó a Rubén Amparo Reyes Mañón, contra quien dirige el recurso.
3. Mediante memorial de defensa depositado en fecha 17 de marzo de 2015, en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia, la parte recurrida Rubén Amparo Reyes Mañón, dominicano, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0742581-1, domiciliado y residente en la calle Luperón núm. 14, sector Cabimar del Este, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, quien tiene como abogados constituidos a los Lcdos. Martín Ernesto Bretón Sánchez y Fidel Moisés Sánchez Garrido, dominicanos, titulares de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0107736-0 y 010-0096719-8, con su estudio profesional abierto en la Torre Élite, suite núm. 501, avenida en la 27 de Febrero núm. 329, ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional, presentó su defensa contra el recurso.
4. La audiencia para conocer el recurso de casación fue celebrada por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia,

en sus atribuciones *laborales* en fecha 3 de agosto de 2016, en la cual estuvieron presentes los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez y Francisco Ortega Polanco, asistidos de la secretaria y del ministerial actuante, trámite que una vez concluido coloca el expediente en condiciones de ser decidido.

5. La actual conformación de los jueces de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, fue establecida mediante el acta núm. 06/2019, de fecha 11 de abril de 2019, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de la manera siguiente: Manuel Alexis Read Ortiz, presidente, Manuel R. Herrera Carbuccia, Rafael Vásquez Goico, Anselmo Alejandro Bello F. y Moisés A. Ferrer Landrón, jueces miembros.

*11. Antecedentes:*

6. Que el hoy recurrido Rubén Amparo Reyes Mañón, incoó una demanda en cobros de prestaciones laborales, derechos adquiridos y indemnización por daños y perjuicios, contra Claro-Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., sustentada en un alegado despido injustificado.
7. Que en ocasión de la referida demanda, la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 428/2013, de fecha 11 de octubre de 2013, cuyo dispositivo dispone textualmente lo siguiente:

**PRIMERO:** DECLARA regular y válida, en cuanto a la forma la demanda laboral en cobro de prestaciones laborales, derechos adquiridos salario caído e indemnización por daños y perjuicios incoada por el señor Rubén Amparo Reyes Mañón, en contra de COMPAÑÍA DPMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (Codetel), por haberse interpuesto de conformidad con la ley que rige la materia; **SEGUNDO:** DECLARA resuelto el contrato de trabajo que por tiempo indefinido unía a las partes por causa de despido injustificado, con responsabilidad para el empleador COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (Codetel); **TERCERO:** ACOGE la demanda en Cobros Prestaciones Laborales y Derechos Adquiridos, en lo concerniente a vacaciones, salario de navidad y participación en los beneficios de la empresa, por ser lo justo y reposar en base legal; **CUARTO:** CONDENA al demandado COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A., (Codetel); pagar a favor del demandante por concepto de los derechos señalados anteriormente: a) La suma de Ochenta y Tres Mil Cincuenta Pesos con 61/100 (RD\$83,050.61), por concepto de Veintiocho (28) días de Preaviso; b) La suma de Un Millón Quinientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos con 78/100 (RD\$1,574,993.79), por concepto de Quinientos Treinta y Tres (533) días de Cesantía; c) La suma de Cincuenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Nueve Pesos con 62/100 (RD\$53,389.62), por concepto de Dieciocho (18) días de vacaciones; d) La suma de Cuarenta y Siete Mil Setecientos Diez Pesos con 34/100 (RD\$47,710.34), por concepto de proporción salario de navidad; e) La suma de ciento dieciocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos con 72/100 (RD\$118,643.72) por concepto de participación de los beneficios de la empresa; f) La suma de Cuatrocientos Veinticuatro Mil Noventa y Dos Pesos con 00/100 (RD\$424,092.00), en aplicación del artículo 95 del Código de Trabajo; Para un total de Dos Millones Trescientos Un Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 90/100 (RD\$2,301,879.90); **QUINTO:** CONDENA al demandado COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (Codetel) a pagar a favor del demandante la suma de Cinco Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos con 08/100 (RD\$5,935.08) por concepto de Salario Caídos, por ser lo justo y reposar en base legal; **SEXTO:** Rechaza la reclamación de compensación de salida conforme al pacto colectivo, por falta de pruebas. **SEPTIMO:** RECHAZA la reclamación de daños y perjuicios, por improcedente. **OCTAVO:** ORDENA al demandado COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (Codetel) tomar en consideración la variación en el valor de la moneda desde la fecha en que se produjo la demanda hasta que se pronuncie la presente sentencia en virtud del artículo 537 del Código de Trabajo; **NOVENO:** CONDENA al demandado COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. (Codetel) al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho de los LICDOS. MARTIN ERNESTO BRETON SANCHEZ Y FIDEL MOISES SANCHEZ GARRIDO, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad (sic).

8. Que tanto la parte demandada Claro-Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., como el demandante Rubén Amparo Reyes Mañón, interpusieron recurso de apelación contra la referida sentencia, mediante instancias de fechas 28 de noviembre y 27 de diciembre de 2013, dictando la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, la sentencia núm. 211/2014, de fecha 16 de septiembre de 2014, objeto del

presente recurso de casación y que textualmente dispone lo siguiente:

**PRIMERO:** En cuanto a la forma, declara regulares y válidos los sendos recursos de apelación interpuestos, el principal, en fecha veintiocho (28) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), por la razón social Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro-Codetel) y, el incidental, en fecha veintisiete (27) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013) por el Sr. Rubén Amparo Reytez (sic) Mañón, ambos contra Sentencia No. 051-12-00668, dictada en fecha once (11) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), por la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto de conformidad con la ley; **SEGUNDO:** En cuanto al Fondo, del recurso de apelación principal, incoado por la empresa Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro-Codetel) Compañía Dominicana De Teléfonos (Claro-Codetel), rechaza sus pretensiones contenidas en el mismo, por los motivos expuestos; **TERCERO:** En cuanto al fondo del recurso de apelación incidental interpuesto por el Sr. Rubén Amparo Reytez Mañón, se acogen las pretensiones contenidas en el mismo y se confirman los Ordinales Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo y Noveno de la sentencia apelada y se modificada el Ordinal Séptimo condenando a la empresa demandada originaria y recurrente principal, Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro-Codetel), pagar la suma de doscientos mil con 00/100 (RD\$200,000.00) de pesos, por concepto de los daños y perjuicios sufridos por el trabajador; **CUARTO:** Ordena a la empresa Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro-Codetel), deducir la suma de doscientos ochenta y tres mil novecientos treinta y siete con 06/100 (RD\$283,937.06) pesos, con motivo de la deuda contraída por concepto de avances de salario, admitido por el propio demandante, deducciones que deben ser hechas de los valores que puedan corresponderle por concepto de prestaciones de indemnizaciones laborales; **QUINTO:** Se condena a la Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro-Codetel) al pago de las costas del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de los Licdos. Martín Ernesto Bretón Sánchez y Fidel Moisés Sánchez garrido, abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte (sic).

### *III. Medios de Casación:*

9. Que la parte recurrente, Claro Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., en sustento de su recurso de casación invoca los siguientes medios: "**Primer medio:** Desnaturalización de los medios de pruebas aportados al debate; desconocimiento al Principio de Libertad de Pruebas en materia laboral; falta de motivación legal por descartar medios de pruebas aportados al debate. **Segundo medio:** Violación a la ley; falta de base legal".

### *IV. Considerandos de la Tercera Sala, después de deliberar:*

Juez Ponente: Anselmo Alejandro Bello F.

10. En atención a la Constitución de la República, al artículo 9 de la Ley núm. 156-97 de fecha 10 de julio de 1997, que modificó la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, el artículo 1 de la Ley núm. 3726-53 del 29 de diciembre de 1953 sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, esta Sala es competente para conocer del presente recurso de casación.
11. Que para apuntalar parte de su primer medio la parte recurrente alega, en esencia, que la corte *a qua* desnaturaliza las pruebas aportadas por ambas partes y que fueron validadas por la propia corte *a qua* conforme se puede verificar en la decisión hoy recurrida en casación, al estimar que la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., no probó la existencia de una obligación a cargo del trabajador de informar a su empleador que un ex empleado de la empresa se encontraba laborando en un proyecto de la empresa, a través de un contratista, cuyo deber de información se le imponía conforme el Código de Ética de la Empresa y el Código de Trabajo.
12. Que la valoración de los medios requiere referirnos a las incidencias suscitadas en el proceso ante la jurisdicción de fondo, establecidas de la sentencia impugnada y de los documentos por ella referidos: a) que Rubén Amparo Reyes Mañón, laboró para Claro-Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. y en fecha 4 de septiembre de 2012 operó la terminación del referido contrato de trabajo por despido ejercido por la empleadora; b) que en fecha 4 de octubre de 2012, Rubén Amparo Reyes Mañón, incoó una demanda, sosteniendo, en esencia, que se produjo el despido injustificado mientras prestaba servicios para la empleadora

mediante un contrato por tiempo indefinido, en su defensa la parte demandada sostuvo que el trabajador incurrió en falta de probidad y violación de los artículos 3, 8, 14 y 19 del artículo 88 del Código de Trabajo; demanda que fue acogida, parcialmente, decidiendo declarar resuelto el contrato de trabajo, por despido injustificado con responsabilidad para el empleador; c) que no conforme con la citada decisión, ambas partes recurrieron en apelación reiterando sus argumentos, dictando la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional la decisión núm. 211/2014, la cual rechaza el recurso de apelación principal y acoge parcialmente el incidental, en la forma en que aparece copiado en otra parte de este fallo.

13. Que la corte *a qua* para fallar en el sentido en que lo hizo expresó en sus motivos, lo siguiente:

"Que en el expediente confirmado reposa copia de las comunicaciones de fecha cuatro (04) del mes de septiembre del año (2012), enviada por la empresa al reclamante y al Ministerio de Trabajo, en la cual se rescindían el contrato de trabajo, por despido justificado al "SR. RUBEN AMPARO REYES MAÑÓN" por incurrir en falta de probidad y honradez, rompió el vínculo de confianza de su empleador y violó los ordinales 3, 8, 14 y 19 del artículo 88 del Código de Trabajo y el Reglamento Interior de Trabajo y el Código de Ética, Política y Procedimiento de la compañía; Que entre los documentos depositados (...) se encuentra una (1) copia de un correo electrónico enviado por la empresa Claro-Codetel, en fecha cinco (05) de septiembre del dos mil doce (2012), dirigiendo la misma a todos los empleados de la empresa en la cual expresa que la causa fundamental de la salida del trabajador fue el haber permitido que una brigada de trabajo de un contratista trabajara un ex empleado que había sido cancelado y que al no notificarla a su supervisor, ni a la gerencia se convirtió en una falta grave ya que no se puede permitir que personas que han sido separadas de la empresa por acciones fraudulentas trabajen para empresas que le dan servicios a CLARO-CODETEL, como lo exige el Código de Ética de la compañía"(...); que a juicio de esta Corte, la relación laboral entre el Sr. Rubén Amparo Reyes Mañón y la Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro-Codetel), terminó por despido ejercido por la empresa de manera injustificada al no probarle a esta Corte las supuestas faltas cometidas por el trabajador (...); que no se comprobó que el trabajador tuviera conocimiento de que tenía que denunciar la presencia del Sr. Melanio Morel a la empresa (...)". (sic).

14. El artículo 87 del Código de Trabajo define el despido justificado como: "(...). *Es justificado cuando el empleador prueba la existencia de una justa causa prevista al respecto en este Código.*

15. Que la falta grave es definida por aquella que "resulta de un hecho o de un conjunto de hechos imputables al trabajador, que constituye una violación de las obligaciones que resultan del contrato de trabajo o de las relación de trabajo que imposibilitan el mantenimiento del trabajador en la empresa".

16. Que la falta de probidad es el acto contrario a la rectitud de conducta y al cumplimiento del deber, y por su parte la falta de honradez implica apoderarse o disponer indebidamente de cosas ajenas, y ambas atentan contra la confianza y la buena fe que deben regir en las relaciones de trabajo, en la medida que atacan un modelo de conducta social en las ejecuciones de las obligaciones de trabajo, las cuales deben ser claramente establecidas en el tribunal de fondo, pues las mismas se relacionan con un desborde, no solo de la conducta laboral como tal, sino de la conducta personal del trabajador.

17. Que la corte *a qua*, en su poder soberano de apreciación y en la ponderación de las pruebas que les fueron presentadas, tanto testimoniales como documentales, las cuales constan en la sentencia impugnada, determinó, de forma idónea, los hechos de la causa e hizo una correcta aplicación del derecho, al declarar injustificado el despido del recurrido, sustentada en que la empresa recurrente no demostró las faltas cometidas por el trabajador en la ejecución de sus obligaciones en el cumplimiento de su deber, las cuales fueron invocadas en la comunicación de despido, sin que se advierta que, al hacerlo, haya incurrido en desnaturalización de las pruebas, razón por la cual el medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado.

18. Que en parte de su primer y segundo medio los que se examinan reunidos por su estrecha vinculación y por resultar útil a la solución del caso, la parte recurrente alega, en esencia, que la corte *a-qua* desnaturalizó las declaraciones del testigo Alejandro Antonio Brito Moronta al validarlas y luego manifestar, que Claro-Compañía

Dominicana de Teléfonos, C. por A., no probó las faltas cometidas por Rubén Amparo Reyes Mañón; que el tribunal *a quo* incurrió en una grave violación a la ley y falta de base legal al condenarla al pago de RD\$200,000.00, a favor de Rubén Amparo Reyes Mañón por concepto de supuestos daños y perjuicios causados por la exponente, determinación realizada por la corte *a qua* partiendo de una evidente desnaturalización, ya que las declaraciones del testigo Alejandro Antonio Brito Moronta no fueron dirigidas en lo que concierne a Rubén Amparo Reyes Mañón, sino a Melanio Morel; que es ampliamente conocido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que para que se encuentre comprometida la responsabilidad civil de la parte demandada, frente a la parte actuante (demandante), deben existir tres (3) elementos esenciales e indispensables: la falta, el perjuicio o daño y una relación de causalidad entre la falta y el perjuicio o daño; que lo único que se puede observar es que la corte *a qua* dispuso que la Claro-Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., supuestamente incluyó a Rubén Amparo Reyes Mañón, en una "lista negra", de la cual no existe evidencia alguna, toda vez que, conforme a las declaraciones del testigo que sirvieron de base para la condenación al pago de la indemnización en cuestión, este manifestó, al preguntarle de la supuesta lista negra, lo siguiente: "no conozco esto, sé que hay un listado personal que ha salido por dolo o robo que no pueden trabajar con la compañía; que el listado al cual se refiere el testigo Alejandro Antonio Brito Moronta, el denominado "Personal inhabilitado para establecer relación laboral y/o Comercial con Claro", es un documento de naturaleza confidencial y restringida, aportado por Rubén Amparo Reyes Mañón, de manera fraudulenta, ya que el mismo, al momento de su publicación interna no era trabajador o empleado de Claro-Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A.

19. Que en cuanto a la alegada desnaturalización de las declaraciones del testigo Alejandro Antonio Brito Moronta, invocada por la parte hoy recurrente, apoyada en que la corte *a qua* fundamentó su decisión de condenarlo al pago de una indemnización por daños y perjuicios, con base a declaraciones desnaturalizadas y a un documento confidencial y restringido de la empresa; en ese tenor, consta en la sentencia recurrida que dicho testigo manifestó ante la pregunta realizada por la corte *a qua* de si la compañía tiene una lista negra de personas que no pueden trabajar con ella ni con las empresas de ese ramo, lo siguiente: "(...) si sé que hay un listado de personal que ha salido por dolo o robo que no pueden trabajar con la compañía". Que la situación que acontece se robustece al consignar igualmente la corte *a qua* en su decisión, lo siguiente: "(...) figura como documento depositado por la parte recurrente incidental, un listado con la relación de personas impedidas de tener relación laboral o comercial con la empresa Claro-Compañía Dominicana, C. por A., y en el mismo se puede apreciar la foto con el nombre del trabajador Rubén Amparo Reyes Mañón".
20. Que en la especie, aunque el testigo no se refiere, de manera directa, a la "lista negra", ni a Rubén Amparo Reyes Mañón como sostiene la parte hoy recurrente, sí hace referencia a un listado de personas que no pueden trabajar en la compañía, teniendo el mismo sentido y alcance para retener un daño, máxime si el testigo no expreso en ningún momento que la "lista" tuviera un carácter confidencial y restringido; hecho que el hoy recurrente reconoce y confirma por ante esta jurisdicción de alzada en su recurso como cierto la existencia de una lista denominada "Personal inhabilitado para establecer relación laboral y/o Comercial con Claro", sin probar el alegado carácter confidencial y restringido que alega, y peor aún, que fuera obtenida de manera fraudulenta por Rubén Amparo Reyes Mañón, como invoca.
21. Que además, es preciso indicar, que nada se opone para que un tribunal fundamente el establecimiento de un hecho en las declaraciones de un testigo, a pesar de que la misma no le merezcan crédito, en relación a otro hecho, pues los jueces aprecian las pruebas aportadas y determinan cuáles de ellas están acorde a los hechos, lo que en la especie evaluó la corte *a qua* al retener como motivo para su decisión algunos aspectos de las declaraciones del testigo, Alejandro Antonio Brito Moronta. Que la situación que acontece se robustece, al consignar igualmente la corte *a qua* en su decisión, lo siguiente: "(...) figura como documento depositado por la parte recurrente incidental, un listado con la relación de personas impedidas de tener relación laboral o comercial con la empresa Claro-Compañía Dominicana, C. por A., y en el mismo se puede apreciar la foto con el nombre del trabajador Rubén Amparo Reyes Mañón".
22. Que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha mantenido el siguiente criterio: "Que en esta materia

no se establece un orden jerárquico en la presentación de la prueba que otorgue más categoría a un medio que a otro, por lo que tanto la documental como la testimonial deben ser analizadas por los jueces del fondo en igualdad de condiciones, quienes formaran su criterio en base a la que le resulte más creíble (...).

23. Que en cuanto a lo alegado por el recurrente en el sentido de que la corte *a qua*, para retener daños y perjuicios en su contra, debió verificar la presencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, a saber: la falta, el daño y la casualidad; si bien es cierto que de acuerdo al artículo 712 del Código de Trabajo, el demandante está liberado de la prueba del perjuicio que le ocasione una violación a las disposiciones del Código de Trabajo, cometida en su contra, corresponde a los jueces apreciar si un acto ilícito ha generado algún daño y el alcance del mismo.
24. Que dejó establecido la corte *a qua* en relación al agravio examinado, lo siguiente: "(...) que esta Corte considera que debe ser indemnizado por la objeción de que está siendo objeto daños que ésta Corte considera deben ser reconocidos en la suma de doscientos mil pesos con 00/100.(RD\$200,000.00) de pesos" (sic) .
25. Que la responsabilidad en materia laboral se rige por el derecho civil, ya que así lo dispone el artículo 713 del Código de Trabajo y constituye un criterio jurisprudencial reiterado que establece que los jueces son soberano para apreciar el monto de la indemnización reparadora siempre que fundamenten su decisión; en la especie, el tribunal de fondo comprobó, como una cuestión de hecho, la falta imputable en que incurrió la empresa hoy recurrente, que desbordó los límites de la buena fe y de una actuación razonable acorde a la finalidad social de la legislación laboral, concretizando el abuso de derecho con una serie de actuaciones que le causó daño cierto, directo y personal al trabajador hoy recurrido, afectando los derechos que le acuerda la ley y la Constitución; que fueron precisamente las actuaciones ejecutadas, contrarias a las normas por la hoy recurrente, las causantes de los daños percibidos por el trabajador, al perder su medio de sustento, sin recibir en lo inmediato compensación alguna y limitado en el campo laboral, por el hecho de ser incluido en una "lista negra", independientemente o no del carácter de confidencialidad atribuido por el hoy recurrente, el cual, como externáramos en otra parte de la presente decisión, no fue probado, por tanto, dicha inclusión atenta contra el honor, el buen nombre, la buena imagen, la dignidad y la moral del empleado.
26. Que de igual manera, esta Tercera Sala ha indicado, mediante jurisprudencia constante lo siguiente: "Que la buena imagen tiene que ver con el nombre y la imagen como derechos personales relacionados con el honor y la intimidad, que forman parte de los derechos de personalidad"
27. Que finalmente, el estudio general de la sentencia impugnada pone de relieve que la corte *a qua* hizo una correcta apreciación de los hechos y documentos de la causa, exponiendo motivos suficientes, pertinentes y congruentes, que justifican la decisión adoptada, lo que le ha permitido a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley, sin incurrir en fallo impugnado en los vicios denunciados por la parte recurrente en los medios examinados, procediendo a rechazar el recurso de casación.
28. Que al tenor del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, toda parte que sucumba será condenada al pago de las costas del procedimiento, en consecuencia, procede condenar a las partes recurrentes al pago de dichas costas.

#### V. Decisión:

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de conformidad con la Constitución de la República, la norma legal, la jurisprudencia aplicada y con base en los motivos expuestos, dicta por autoridad y mandato de la ley la siguiente decisión:

#### FALLA:

**PRIMERO:** Rechaza el recurso de casación interpuesto por Compañía Dominicana de Teléfonos, C. Por A. (Claro-Codetel), contra la sentencia núm. 211/2014, de fecha 16 de septiembre del 2014, dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo.

**SEGUNDO:** Condena a la parte recurrente al pago de las costas de procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho de los Lcdos. Martín Ernesto Bretón Sánchez y Fidel Moisés Sánchez Garrido, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Firmado: Manuel Alexis Read Ortiz, Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello F. y Rafael Vásquez Goico. César José García Lucas. Secretario General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretario General, que certifico.